

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno.—Fortaleza 21

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1895

MARTES 9 DE JULIO

Número 82

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA.

Negociado de Obras públicas

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 310 y con fecha 28 del mes próximo pasado, se comunica á este Gobierno la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Con fecha 3 del corriente mes se ha publicado la siguiente Ley.—DON ALFONSO XII, por la Gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino.—A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:—Artículo 1º Desde la publicación de esta Ley en la GACETA de Puerto-Rico, se considerarán vigentes en la Isla de ese nombre las disposiciones que rigen la minería en la Península, á saber: la Ley de 6 de Julio de 1859, reformada por la de 4 de Marzo de 1868; el Reglamento para su ejecución de 24 de Junio de ese último año, y el Decreto de 29 de Diciembre del mismo estableciendo bases generales para la nueva legislación de minas, así como las órdenes de 18 de Mayo de 1869, 9 de Mayo y 30 de Noviembre de 1870, la Ley de 24 de Julio de 1871, la Real orden de 18 de Diciembre de ese mismo año, las de 29 de Julio y 18 de Septiembre de 1872, las órdenes de 23 de Diciembre de 1873, 9 de Mayo y 13 de Junio de 1874, las Reales órdenes de 3 de Abril y 6 de Junio de 1876, la de 14 de Marzo de 1877, la de 4 de Mayo de 1881, las de 23 de Marzo, 15 de Septiembre y 16 de Octubre de 1884, las de 21 de Mayo y 21 de Julio de 1885 y las de 21 de Febrero de 1890; las cuales disposiciones se entenderán modificadas por las prescripciones contenidas en los siguientes artículos.—Artículo 2º El Gobernador General de la Isla no solo asumirá las atribuciones que la legislación de la Península confiere á los Gobernadores civiles de las provincias, sino que expedirá á nombre suyo los títulos de propiedad de las concesiones mineras, resolviendo en su caso acerca de las condiciones especiales que para su otorgamiento requiera la conveniencia pública, en razón de la naturaleza del mineral ó de las circunstancias del terreno y de la empresa, y podrá dispensar los defectos que produzca la cancelación de los expedientes de minería, cuando no se cause perjuicio á tercero.—La mencionada Autoridad, cuando lo estime conveniente y siempre que los expedientes instruidos sobre concesión de propiedad contuvieren oposición, oír el Consejo de Administración en pleno ó su Sección de Gobernación y Fomento, debiéndose informar solamente por esta expresada Sección los negocios que puedan llegar á ser contenciosos.—Artículo 3º De las providencias que dicte el Gobernador General podrán apelar los interesados por la vía contenciosa ante el Consejo de Administración.—Artículo 4º Los plazos para la tramitación de los expedientes de minas serán los mismos que establece el Real Decreto de 15 de Enero de 1867 sobre el régimen de la minería en la Isla, vigente hasta ahora.—Artículo 5º El depósito que cada Registrador deberá consignar al solicitar una concesión minera, será de 60 pesos, cuando no exceda de doce el número de pertenencias ó hectáreas pedidas; aumentándose 2 pesos por cada una de las que pasen de dicho número; sin perjuicio de que podrá exigirse que los Registradores depositen además el aumento necesario para el completo pago de las operaciones periciales, en los casos en que los gastos que para ellas se calculen sean superiores á las cantidades consignadas, previo presupuesto razonado del Ingeniero que haya de practicar

las diligencias, informado por su Jefe inmediato y aprobado por el Gobernador General.—Artículo 6º Devuelto por los Ingenieros los expedientes de los registros demarcados, el Gobernador General dispondrá que se notifique á los interesados ó sus representantes el acuerdo que haya dictado aprobando ó desaprobando las demarcaciones; especificando en el primer caso cual sea el número de pertenencias demarcadas; las cuales notificaciones se practicarán en la forma prescrita por el artículo 40 del Reglamento de 24 de Junio de 1868.—Dentro de los quince días contados desde el siguiente al en que resulten ejecutorias las providencias del Gobierno General aprobando las demarcaciones, los interesados ó sus representantes consignarán en la Sección de Fomento del Gobierno, en papel de reintegro, la cantidad de 6 por cada expediente, cuando éste no comprenda más de quince pertenencias, si el mineral objeto de la concesión fuere hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, turba, acfulto, arcillas bituminosas ó carbonosas, sulfato de sosa, sal gema, fosfatos calizos, escoriales ó terreros, y 50 centavos más por cada pertenencia que exceda de las quince.—Para todos los demás minerales, se abonarán en papel de reintegro 6 pesos por cada expediente, cuando éste no comprenda más de seis hectáreas ó pertenencias; y además 1 peso por cada una que exceda de seis.—Cuando el expediente comprenda menos de 15 ó 6 pertenencias respectivamente, se abonarán siempre 6 pesos.—Los interesados entregarán además, dentro del mismo plazo, y también en papel de reintegro, la cantidad que corresponda al timbre ó sello del en que haya de extenderse el título de propiedad.—Artículo 7º Según determina la Ley de 24 de Julio de 1871, modificando el artículo 19 del Decreto de bases generales de 21 de Diciembre de 1868, las concesiones para la explotación de sustancias minerales son á perpetuidad, mediante un cánón anual por hectárea, que se fijará en la siguiente forma.—Las piedras preciosas y los cráteros de las sustancias metalíferas comprendidas en la 3ª Sección, exceptuando el hierro, 4 pesos. El hierro, las materias combustibles, los escoriales y terrenos metalíferos y demás sustancias de la 2ª y 3ª Sección, 1 peso y 60 centavos.—El cánón deberá pagarse desde la fecha en que la concesión se haga; mientras el dueño de la mina lo satisfaga puntualmente, no podrá privarse del terreno concedido, sea cual fuere el grado en que lo explore.—Artículo 8º Las multas que prescribe el artículo 49 de la Ley de 4 de Marzo de 1868 se aplicarán en la proporción establecida de real fuerte por real vellón.—Artículo 9º Quedan exentas todas las minas, cualquiera que sea el mineral que en ellas se explote, de la contribución de 3 por 100 de sus productos brutos que establecía el artículo 79 del Real Decreto de 15 de Enero de 1867, los cuales minerales podrán circular libremente por la Isla y exportarse sin satisfacer derechos de ninguna clase.—Artículo 10. Las minas cuya concesión caduque por renuncia voluntaria de sus concesionarios, solventes de pagos al Estado, no estarán sujetas á las subastas que determina el artículo 23 del Decreto de bases de 29 de Diciembre de 1868.—En tales casos, el Gobernador General declarará francos y registrables los terrenos que las dichas minas hubieren ocupado, y ordenará que su declaración se publique en la GACETA de la Isla.—Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad que sean, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.—Dado en Palacio á 3 de Mayo de 1895.—YÓ LA REINA REGENTE.—El Ministro de Ultramar, TOMAS CASTELLANO Y VILLARROYA.—Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conocimiento, y para que se sirva disponer la publicación de la expresada Ley en la GACETA de esa Isla”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del actual, de su orden superior se publica en este PERIÓDICO OFICIAL para general conocimiento, advirtiendo que con arreglo á las disposiciones transitorias de la

nueva Ley los expedientes que se hallan pendientes á terminar por los trámites que en la misma se establecen como mas breve y expedito á menos que los interesados declaren por escrito á este Gobierno que prefieren la tramitación anterior, dentro de los sesenta días siguientes de la publicación de la presente Ley.

Puerto-Rico, 22 de Junio de 1895.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*. [1709]

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 308 y con fecha 28 del mes próximo pasado, se comunica á este Gobierno la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Vista la Ley de 3 del corriente mes, por la que se dispone que rijan en esa Isla las prescripciones relativas á minería establecidas en la Península.—Considerando de la mayor conveniencia el que dichas prescripciones citadas en el artículo 1º de la expresada Ley así como las demás contenidas en la misma formen parte de un solo Cuerpo de doctrina en el que se procura condensarlos y ordenarlos debidamente con la mayor claridad que sea posible; S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido disponer, que ordene V. E. el nombramiento de una Comisión compuesta del Ingeniero Jefe de la Sección de Fomento de ese Gobierno General, como Presidente, de un Ingeniero del ramo de Obras públicas y de un representante de la Intendencia de Hacienda de esa Isla, como Vocales, para que redacten y propongan un Reglamento, en el que se reúnan y enlacen todas las disposiciones citadas relativas á la legislación de minas y que en lo sucesivo pueda servir de norma para la aplicación á esa Isla de la Ley de 3 de Mayo corriente que con esta fecha se comunica á V. E., y que una vez formado dicho Reglamento se envíe á la aprobación de este Ministerio con los informes que V. E. juzgue conveniente consultar, publicándose esta resolución en extracto en la *Gaceta* de Madrid é íntegra en la de esa provincia.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 12 del actual, de su orden superior se publica en este PERIÓDICO OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Junio 22 de 1895.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*. [1710]

NEGOCIADO 2º

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 371 y con fecha 17 del mes próximo pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada en solicitud de indulto del resto de la pena de 7 años, 4 meses y 1 día de prisión mayor y multa de 4377 pesetas que la Audiencia de Puerto-Rico impuso á Fabriciano Marrero, en causa seguida por el delito de atentado á agentes de la Autoridad, á mano armada: Considerando: que, el citado reo es reincidente, que no lleva aun extinguida la mitad de su condena y que dada la índole del delito perseguido no existe razón alguna de equidad, justicia ó conveniencia pública que aconseje la concesión de la gracia solicitada: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto, aplicada á las provincias de Ultramar por Real Decreto de 12 de Agosto de 1887: de acuerdo con lo informado por la Sala sentenciadora y lo consultado por la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado: S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia elevada á favor de Fabriciano Marrero.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 30 de